

Puentes, no muros

Contribuciones para una
política progresista en migraciones

Carlos Sandoval García (editor)



ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE



CLACSO

Puentes, no muros : contribuciones para una política progresista en migraciones / Mauricio Gaborit... [et al.] ; editado por Carlos Sandoval García.- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; México : Fundación Rosa Luxemburg, 2020.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-722-582-2

1. Migración. 2. Personas Migrantes. 3. Política Social. I. Gaborit, Mauricio. II. Sandoval García, Carlos, ed.
CDD 304.8

Puentes, no muros

Contribuciones para una política progresista en migraciones

Carlos Sandoval García
(editor)





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO - Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Equipo editorial

Maria Fernanda Pampin - Directora Adjunta de Publicaciones

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

María Leguizamón - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial



ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Fundación Rosa Luxemburg

Coordinadora de Proyectos para Costa Rica y Nicaragua de la RLS: Grettel Montero Varela

Coordinador de la obra: Carlos Sandoval García

Revisión bibliográfica: Alina Rojas

Diagramación y revisión filológica: Ariana Alpízar Lobo

Fotografía de portada: Herika Martínez (AFP)

Diseño de portada: Enrique César García

Versión impresa: Editorial de la Universidad de Costa Rica.



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

ISBN 978-987-722-582-2

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar | www.clacso.org

Esta publicación es financiada con recursos de la RLS, con fondos del BMZ.

Puentes, no muros

Contribuciones para una política progresista en migraciones

Carlos Sandoval García
(editor)

Agradecimientos

Puentes, no muros. Contribuciones para una política progresista en migraciones es resultado del coloquio “La politización de la migración. Desafíos para el pensamiento crítico y la política progresista”, el cual se llevó a cabo los días 29 y 30 de noviembre del 2017, en el marco de la Cátedra Humboldt y con apoyo de Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) de la Universidad de Costa Rica.

Puentes, no muros subraya la importancia de acompañar la crítica de lo existente con elementos de una política progresista. A menudo la urgencia de refutar la abundante retórica xenófoba no deja muchas oportunidades para deletrear, si se pudiera decir así, cómo sería un mundo sin muros.

Mi especial agradecimiento a Marcela Vilchez, Juan Manuel Sanabria y Jeannette Acón, quienes desde la Vicerrectoría de Investigación facilitaron la organización del evento. Mis gracias también al Dr. Javier Trejos Zelaya y al Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, quienes desde UCREA apoyaron esta iniciativa.

Muchas gracias también a las personas participantes en el coloquio, quienes dispusieron de su tiempo para viajar a Costa Rica, preparar sus artículos y atender múltiples consultas. Gracias también a quienes no participaron del coloquio, pero posteriormente se unieron a la redacción de algunos artículos.

Las personas autoras laboramos en universidades de Alemania, Canadá, Costa Rica, El Salvador, España y México, es decir, procuramos con ello abrir la conversación más allá de círculos académicos que usualmente no se vinculan más allá de países o regiones.

La publicación del libro es posible gracias al apoyo de la oficina regional para México, Centroamérica y Cuba de la Rosa Luxemburg Stiftung. Muchas gracias a Grettel Montero Varela por facilitar la coordinación. Herika Martínez es la autora de la foto de la portada, la cual se reproduce con autorización de la Agencia Francesa de Noticias. Alina Rojas trabajó en la edición de las bibliografías, Enrique César García diseñó la portada y Ariana Alpizar Lobo se encargó de la revisión filológica y de la diagramación del libro. El personal de Editorial de la Universidad de Costa Rica se esmeró en la impresión del libro.

Ojalá –una palabra heredera de las migraciones y la interculturalidad– que *Puentes, no muros* sea de utilidad para quienes procuran triangular investigación, docencia, incidencia y trabajo comunitario en el campo de las migraciones.

Contenido

Agradecimientos	VII
Abreviaturas	XI
Introducción	XIII
La construcción social de la persona migrante como enemigo <i>Mauricio Gaborit</i>	1
Reflexiones sobre el apartheid global y la migración <i>Yajaira Ceciliano-Navarro, Tanya Golash-Boza</i>	25
Las migraciones de Centroamérica y el mito securitario de Occidente: ¿Un nuevo-viejo acontecimiento? <i>María del Carmen García Aguilar, Daniel Villafuerte Solís</i>	49
Documentar a las personas migrantes en México: ¿Protegiendo a los vulnerables o disciplinando a los “ingobernables”? <i>Tanya Basok</i>	73
Política social y la politización de la migración en América Latina <i>Koen Voorend, Megan Rivers-Moore</i>	95
¿Por qué la migración se convierte en la bandera de las derechas? Consideraciones para una política progresista <i>Carlos Sandoval García</i>	121
Construyendo ciudades solidarias: De la protesta a la política <i>Stefanie Kron, Henrik Lebuhn</i>	143
Desafiando el discurso securitario: La propuesta de las fronteras abiertas <i>Juan Carlos Velasco</i>	163
Índice analítico	181
Acerca de los autores/as	191

Abreviaturas

ACNUR	Agencia para refugiados de las Naciones Unidas
AEDPA	Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva
AFD	Alternativa por Alemania
AFI	Agencia Federal de Investigaciones
ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos
CICTE	Comité Interamericano contra el Terrorismo
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
COMAR	Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
FEM	Foro Económico Mundial
GANSEG	Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza
IIRIRA	Ley de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes
INM	Instituto Nacional de Migración
Ley Dream Act	Development Relief and Education for Aliens Minors Act
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAC	Partido de Acción Ciudadana
PFP	Policía Federal Preventiva
RDA	República Democrática Alemana
TNCA	Triángulo Norte de Centro América
Unicef	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Política social y la politización de la migración en América Latina

Koen Voorend

Megan Rivers-Moore

Introducción

La incorporación social y económica de las poblaciones migrantes es posiblemente uno de los mayores desafíos que enfrentan los Estados modernos. La controversia de esta incorporación se vuelve especialmente tangible en los mercados laborales y, de interés para este capítulo, en las políticas de bienestar. No es coincidencia que en elecciones recientes, en países como Estados Unidos (Trump), el Reino Unido (Brexit), España (Rajoy), Francia (Le Pen), los Países Bajos (Wilders y Baudet) y Alemania (Gauland), la creciente popularidad de los partidos populistas de derecha y los sentimientos antinmigrantes se basen en gran medida en el debate sobre los derechos sociales de las personas migrantes y su acceso a los servicios sociales. De manera similar, en los países latinoamericanos que reciben más migrantes, la migración se ha convertido en un tema cada vez más politizado. Por ejemplo, durante el período previo a las elecciones de Costa Rica en 2018, la elección de Donald Trump en los EE.UU. fue como “música para los oídos” para las campañas políticas de la derecha (Gatica, 2017, p. 72).

En particular, Otto Guevara Guth, fundador del Partido Movimiento Libertario, anunció para su quinta campaña presidencial que seguiría el ejemplo del discurso antinmigrante de Trump, cuestionaría especialmente los “abusos de los servicios de la Caja [Caja Costarricense del Seguro Social] por los extranjeros que no pagan”. Cuando mencionó “los extranjeros”, se estaba refiriendo principalmente a población nicaragüense, la cual representa la población inmigrante más numerosa del país. Poco después, incluso el precandidato más moderado del Partido Liberación Nacional (PLN), el tradicional partido de centroderecha (a pesar de sus raíces socialdemócratas), dijo estar de acuerdo en relación con la necesidad de tener una mano firme en la política migratoria para evitar que las personas migrantes “abusen de muchos de los servicios sociales que Costa Rica tiene para beneficiar a los costarricenses” (José María Figueres, Comunicación personal,

21 de febrero de 2017). De hecho, la migración parece haberse convertido en un tema politizado no solo para los populistas de derecha, sino también para los partidos conservadores del centro (Bil-Jaruzelska, 2017).

En países latinoamericanos receptores de personas migrantes con regímenes de política social relativamente sólidos y de largo plazo, como Costa Rica, Argentina y Chile, existe una tensión entre, por un lado, la demanda de un mayor reconocimiento formal de los derechos sociales y, por otro lado, las voces que abogan por limitar el acceso de las personas inmigrantes a los recursos de bienestar. De manera que se crean barreras basadas en criterios de nacionalidad, legalidad migratoria o diferencias (percibidas) étnicas o culturales. Por ejemplo, en Argentina han surgido serios cuestionamientos sobre el avance del país hacia una dirección más inclusiva a principios de siglo. La Ley de Migración del año 2004 reconoce inequívocamente los derechos sociales de las personas migrantes, dejando “poco espacio para la disputa legal” (Noy y Voorend, 2015, p. 620); sin embargo, aflora una creciente resistencia en la sociedad basada en mitos persistentes sobre la migración descontrolada, el colapso del sistema de salud pública y el abuso de la ayuda social pública (Amaya, 2014). Como resultado, el presidente Mauricio Macri ha introducido limitaciones recientes al reconocimiento de los derechos de las personas migrantes.

En este artículo analizamos cómo se politiza la migración en América Latina, principalmente en el caso de Costa Rica; no obstante, hacemos referencia a otros países en la región, como Argentina, los cuales son receptores de personas migrantes con fuertes regímenes de política social. Nuestro argumento es que la política social juega un papel clave en esta politización, independientemente de la variación en los regímenes de política social y el tipo de servicios disponibles. Asimismo, exponemos que, a pesar de que se basa más en mitos que en hechos, esta politización tiene efectos reales en la exclusión de las personas migrantes de los regímenes de bienestar. A lo largo del trabajo, también demostramos que los temores de que la población migrante acceda a la política social varían de acuerdo con las diferencias percibidas de clase y etnicidad y también con ideas particulares sobre el género y la sexualidad de las personas migrantes.

¿Hacia más inclusión?

Al igual que en países como Argentina y Uruguay, Costa Rica tiene un régimen de política social de larga trayectoria. Sin embargo, esta nación se distingue de otros países de la región no solo por el enfoque de universalismo que guía su régimen de política social, sino también porque ha logrado altos niveles de cobertura, incorporando a las clases medias y bajas (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2012). Además, se caracteriza por su elevado gasto social. Costa Rica tiene altos niveles de gasto público en salud, un 6.64 % del PIB. Lo anterior se compara, por ejemplo, con países como Argentina (6.21 %). Ambos países tienen un monto de gasto público en salud per cápita bastante similar (Costa Rica: USD 345, frente a Argentina: USD 358). Más importante aún, en Costa Rica, el Estado le proporciona servicios sociales a un sector mucho mayor de la población, el cual incluye la clase media y la población no asalariada. Países como Argentina y Chile tienen regímenes más liberales, con mayor presencia de la compra de servicios, aunque en Argentina ha habido un esfuerzo por expandir su control sobre la política social en la última década; por ejemplo, mediante la nacionalización de las pensiones y el fomento activo de la introducción de los derechos humanos en los acuerdos internacionales (Novick, 2010).

Sin embargo, tal y como sucede en otros países en la región, en la práctica Costa Rica y Argentina han tenido dificultades para brindar cobertura universal a la población nacional. Debido a esto, a pesar de las importantes diferencias en relación con la forma en que se organiza la provisión social, enfrentan desafíos similares con respecto a la incorporación de las personas migrantes.

Costa Rica se encuentra entre los países de destino migratorio más importantes de América Latina en la última década. Las personas migrantes representan un 9 por ciento de la población total, duplicando la cifra de 4.5 por ciento en Argentina, otro país de destino importante en América Latina (Naciones Unidas, 2017). Si bien tres de cada cuatro personas migrantes son de Nicaragua, esta población mantiene una heterogeneidad de nacionalidades, donde se incluye una importante población colombiana, venezolana (más reciente) y, desde hace varias décadas, estadounidense. Aunque el país ha sido un destino final para muchas personas migrantes, también existe un abanico de tipos de migración: migración temporal y, en menor medida, de tránsito hacia otros destinos.

Sin embargo, la incorporación de personas migrantes nicaragüenses en los arreglos de bienestar, generalmente de estratos socioeconómicos más bajos, ha sido muy polémica, igual que en Estados Unidos y muchos países europeos. La migración de Nicaragua a Costa Rica alcanzó su punto máximo en la década de 1990, luego de las políticas de ajuste estructural llevadas a cabo en las décadas de 1980 y 1990 (Sandoval, 2007). Aunque la migración se desaceleró en la primera década de 2000 (Voorend, 2019), las personas nicaragüenses actualmente representan el 75 por ciento de la población migrante de Costa Rica. Una crisis política en Nicaragua, que comenzó a principios del 2018, condujo al aumento repentino de la migración hacia Costa Rica, asimismo, se presentó una cantidad significativa de solicitudes de refugio.

Por lo anterior, es posible establecer una comparación entre Costa Rica y otros países de la región, ya que enfrenta desafíos similares en torno a la integración de las personas migrantes en sus acuerdos de bienestar, al igual que Argentina, Uruguay y Chile. Dichos países y el Gobierno de Costa Rica han llevado a cabo una reforma migratoria más inclusiva en las últimas décadas. Incluso, han surgido procesos políticos recientes en los cuales se ha cuestionado esta inclusión y la migración ha sido altamente politizada.

La reforma de ley del 2005, la cual entró en vigor a fines de 2006, fortaleció los mecanismos de control que no estaban bien desarrollados en la ley de 1985 (López, 2012). Esta legislación se enfocó en la vigilancia de las personas migrantes indocumentadas y los mecanismos para vigilar la actividad delictiva extranjera. Sin embargo, debido a su naturaleza punitiva y al hecho de que “los derechos humanos, [fueron] casi pasados por alto” (López, 2012, p. 85), la ley obtuvo muchas reacciones negativas, ante las actitudes discriminatorias y xenofóbicas que provocaría hacia las personas migrantes en Costa Rica, particularmente de Nicaragua (López, 2012; Jiménez, 2009).

Tras la presión de la sociedad civil, el sector académico y las organizaciones internacionales (López, 2012), en el 2007 se propuso una nueva reforma para

promover un modelo administrativo para organizar leyes migratorias de acuerdo con una perspectiva de derechos humanos, que haría posible el acceso de los migrantes a las instituciones de bienestar de Costa Rica y otros servicios públicos ofrecidos por el Estado (MIDEPLAN, 2007, p. 49).

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Migración y Extranjería (N.º 8764) en julio de 2009, la cual entró en vigor en marzo de 2010. Esta Ley, en contraste con la legislación anterior, incorporó claramente el concepto de integración (Kron, 2011; López, 2012).

Por primera vez, la legislación compromete al Estado a la inclusión social de las personas migrantes en la sociedad costarricense “basada en los principios de respeto a los derechos humanos; diversidad cultural; solidaridad; y equidad de género” (Ley General de Migración N.º 8764, art. 3). La ley hace múltiples referencias a los derechos humanos internacionales y destaca, posiblemente como resultado de una apertura a la participación de diferentes actores interesados durante el proceso de su redacción, el “bienestar de los migrantes y el respeto por sus derechos” (López, 2012, p 86).

Dada la renuencia de Costa Rica a participar en los procesos de integración regional, como el Sistema de Integración Centroamericana, y su vacilación en firmar convenciones internacionales, este lenguaje más inclusivo parece ser el resultado de la abogacía nacional que, sin embargo, se basa en el discurso de los derechos humanos. En contraste con Argentina, en Costa Rica la integración regional y el argumento transnacional a favor de la extensión de los derechos parecen ser menos importantes que los procesos de formulación de políticas internas en la reforma migratoria (Noy y Voorend, 2015).

Desde una perspectiva más crítica, a pesar del compromiso de la Ley con los derechos de las personas migrantes, la definición de integración en “procesos económicos, científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos” (Ley General de Migración N.º 8764, art. 7) es vaga y no existe un marco regulatorio definido para garantizar su implementación (Voorend, 2019). Al mismo tiempo, mientras este enfoque explícito en la integración social se diferencia del enfoque exclusivo en el control migratorio que se encuentra en otras leyes de migración en América Latina, la Ley ha sido criticada por la centralidad que le sigue otorgando a los temas de seguridad (Kron, 2011) y la gran autoridad asignada a la Policía de Migración.

En principio, una persona migrante en condición migratoria regular y con un seguro social tendría el mismo acceso al régimen de política social que una persona nacida en Costa Rica (con seguro social). Sin embargo, existen mecanismos de exclusión estructurales, institucionales y de agencia, lo cuales hacen difícil el acceso a los servicios sociales en la práctica (Voorend, 2019). Esta dificultad pasa principalmente por las barreras económicas e institucionales que ha creado el Estado costarricense. En específico, los altos costos involucrados y la complejidad legal y burocrática de los procesos de regularización y de obtener el seguro social han sido muy criticados (Voorend, 2016; Voorend, 2019). Para la población migrante con estatus migratorio irregular, el acceso a la política social es prácticamente nulo, salvo para servicios de salud de emergencia.

Así las cosas, en este trabajo se argumenta que no solo la politización de la migración ayuda a explicar esta exclusión, sino que la política social misma es clave para explicar por qué la migración se convierte en un tema tan politizado.

La migración politizada

El estudio clásico de Anderson (1983) sobre el surgimiento de naciones como “comunidades imaginadas” enfatiza la importancia de tener una relación con el aparato estatal para generar un sentido de pertenencia. Dado que las naciones son ficciones cuidadosamente construidas, la ciudadanía requiere mantener contacto con las instituciones estatales para definir los límites de la comunidad imaginada. Las estructuras administrativas y educativas en los Estados coloniales y poscoloniales han desempeñado un papel particularmente importante en el desarrollo de ese sentido de pertenencia, el cual dependía y continúa dependiendo en gran medida de la definición de quien *no* pertenece.

El político derechista costarricense, Otto Guevara, posicionó de manera explícita la migración como tema clave en el debate electoral a principios del año 2017. Inmediatamente después de la victoria de Trump, en las elecciones de Estados Unidos, Guevara anunció que seguiría la estrategia política del republicano en la politización extrema de la migración. Fue una lectura estratégica del clima político en Costa Rica, se aprovechó la oportunidad para reposicionar un tema polémico en la agenda electoral. Guevara nunca recibió los votos que esperaba obtener gracias a esta estrategia, pero su lectura fue precisa y ayudó a definir los términos del debate durante las elecciones nacionales.

Las solicitudes de las personas migrantes para optar por los beneficios de bienestar universal del país han sido cada vez más cuestionadas (Sandoval, 2007), en un contexto de debilitamiento de la provisión de políticas públicas sociales. Si bien las estructuras de bienestar de Costa Rica se han mantenido muy similares a los días dorados de la década de 1970, después de la crisis de la deuda de 1980, ha habido una “creciente tensión debido a la necesidad de hacer más con menos recursos per cápita” (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2012, p. 90). Como resultado, la calidad de los servicios sociales públicos se ha deteriorado, mientras que la demanda y la oferta de servicios privados han florecido. A su vez, la migración creció a tasas sin precedentes. Entre 1984 y 2000, la población migrante en Costa Rica creció a una tasa promedio anual de 7.5 % (INEC, 1984; INEC, 2000), lo anterior se explica, en gran parte, por la llegada de nicaragüenses. En la actualidad, la población migrante en Costa Rica representa aproximadamente el 9 % de los habitantes.

El deterioro de los servicios públicos y los recortes en la inversión pública “por lo general se representan no como una consecuencia de las políticas

neoliberales, sino como resultado de la migración de los nicaragüenses a Costa Rica” (Sandoval, 2004, p. 444). Dos desarrollos recientes se han sumado a las tensiones ya existentes. En primer lugar, la crisis financiera internacional, que estalló en el año 2008, desaceleró la economía de Costa Rica, lo cual llevó casi inmediatamente a un aumento en la tasa de desempleo, de manera que se pasó de un 4.9 % a un 7.8 %, entre 2008 y 2009 (Robles Rivera y Voorend, 2011), y se alcanza un 9.2 % a fines del 2015 (INEC, 2015). En segundo lugar, durante el año 2011 la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encontró en una crisis financiera que puso en cuestión la sostenibilidad de la institución (Carrillo *et al.*, 2011). Lo anterior fue en parte causado por la misma desaceleración económica, pero especialmente por un aumento reciente en los costos de los salarios y una mala administración (Mora, 2015; Jaramillo, 2013; Organización Panamericana de la Salud, 2011; Carrillo *et al.*, 2011). Como resultado, la situación financiera de la CCSS se deterioró rápidamente, entre 2009 y 2011, cuando se expuso el problema públicamente. Vale la pena señalar que las preocupaciones de las personas costarricenses sobre la presencia de migrantes nicaragüenses principalmente se centran en la institución estatal que utiliza la clase media: el sistema de atención médica. Aunque otras instituciones estatales también están en crisis y con serios problemas de presupuesto, por ejemplo la educación pública, la presencia de migrantes rara vez motiva la xenofobia, ya que buena parte de la clase media costarricense utiliza la educación privada.

Es crucial tener en cuenta que el sentimiento antinmigrante no está generalizado; antes bien, se dirige a poblaciones muy específicas, según la percepción de su acceso y uso de los servicios de bienestar del Estado. Por ejemplo, un número importante de estadounidenses (y, en menor medida, canadienses) ha migrado a Costa Rica, inicialmente para aprovechar la legislación del año 1971, la cual permitía exenciones fiscales y reglas de residencia relajadas para la población migrante pensionada. Según el último censo nacional, hay 10 568 residentes norteamericanos documentados en Costa Rica (INEC, 2011); no obstante, los grupos de expatriados en Costa Rica y el Departamento de Estado de los EE.UU. estiman que más bien hay entre 70 000 y 90 000 personas, muchas de estas se encuentran indocumentadas (Rivers-Moore, 2019). En ese sentido, parece que la población de pensionados estadounidenses está creciendo: el número de ciudadanos de los EE.UU. que cobran sus cheques de Seguridad Social estadounidense en Costa Rica ha aumentado en un 67 por ciento desde el 2002 (O’Dowd, 2013).

Sin embargo, en contraste con el tratamiento xenófobo hacia las personas nicaragüenses, la presencia de estadounidenses (documentados o no) no

genera mayor interés para los medios de comunicación ni para los políticos. Ese silencio es significativo, dado que la investigación cualitativa revela que la población migrante estadounidense y canadiense aprovecha los servicios de la CCSS con regularidad. Las personas migrantes norteamericanas entrevistadas mencionaron el uso de varios servicios médicos estatales, desde medicamentos gratuitos para la presión arterial, hasta la cirugía para tratar el cáncer. Si bien la mayoría prefiere acudir al sistema privado para citas regulares, muchos indicaron que asistieron a la CCSS principalmente para atención de emergencia. Además, cabe resaltar que el porcentaje de personas estadounidenses que accede a estos servicios de emergencia sin seguro social es mucho más alto que el porcentaje de nicaragüenses que lo utiliza: 50 % frente a 24.6 %, respectivamente (datos del 2006) (Voorend, 2019).

A pesar de los análisis claros que apuntan a otros factores, las dificultades financieras de la CCSS generalmente se asocian a la demanda de servicios de salud por parte de las personas migrantes nicaragüenses (Dobles *et al.*, 2013). Alimentados por la cobertura negativa de los medios (Campos y Tristán, 2009; Solís, 2009; Sandoval, 2007; González y Horbaty, 2005), al menos tres de cada cuatro costarricenses considera que la población migrante nicaragüense es directamente culpable de la crisis de la seguridad social de 2011 (Dobles *et al.*, 2013; Sandoval, 2012; González y Varela, 2003). Así pues, se percibe que las personas nicaragüenses tienen más probabilidades de usar los servicios sociales públicos, como resultado de sus bajos niveles sociales y su “ilegalidad” (Bonilla-Carrión, 2007, p. 146), además, se supone que están sobrerrepresentados como usuarios de los servicios médicos (Voorend, 2019). Como tal, la hostilidad antinmigrante “ha sido la materia prima de las fantasías excluyentes de la nación” (Sandoval, 2012, p. 221).

La lectura de Guevara de este contexto fue correcta y coincidió con la expectativa basada en su postura política anterior y la política de su partido. Sin embargo, lo que sorprendió fue la explicación explícita con la cual se adoptó la postura y la consiguiente adopción de discursos similares por parte de los partidos “tradicionales”, quienes aparentemente compartieron esta lectura de las estructuras de oportunidades políticas. El PLN, tradicionalmente uno de los partidos políticos más importantes de Costa Rica, organizó un debate interno entre los precandidatos que estaban luchando para representar a su partido en la carrera hacia la presidencia. Respecto a la migración, no hubo debate. Todos estuvieron de acuerdo en que era necesario realizar cambios en la política migratoria del país, en beneficio de las personas costarricenses. Su discurso refleja, claramente, el paradigma de la seguridad, en el cual es necesario un control estricto para hacerle frente a la migración “ilegal” no deseada. En esa línea, el último candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez, dijo

que le “pasaría la factura” a los extranjeros que utilicen el sistema social de Costa Rica.

Este llamado a un control más estricto y a una política de integración menos permisiva contrasta con la reciente tendencia en Costa Rica de generar un marco legal más inclusivo. Los análisis más críticos de la Ley del 2009 han demostrado preocupaciones en torno a cómo la “retórica de la integración sirve para legitimar... una serie de elementos preocupantes” (Fouratt, 2014, p. 166), tal es el caso de la gran autoridad otorgada a la Policía de Migración. Un ejemplo de la importancia que tiene la política social en el debate político, sobre temas migratorios, fue el nuevo requisito de afiliarse al sistema de seguridad social de Costa Rica para poder iniciar el proceso de regularización migratoria (Fouratt, 2014; Voorend, 2013; Voorend, 2016).

El rechazo hacia las personas migrantes nunca se distribuye equitativamente, sino que se dirige a grupos específicos de manera que refleje el contexto político-económico más amplio en juego en un momento dado. Por ejemplo, el surgimiento de políticas populistas de derecha en América Latina y en muchas otras partes del mundo, Brasil (Bolsonero), Filipinas (Duterte) y Hungría (Orbán), ocurre al mismo tiempo que toma importancia la política sexual. Los debates sobre el aborto, la educación sexual en las escuelas y el matrimonio igualitario para gays y lesbianas han sido amargos y divisorios en muchos países de Latinoamérica.

En Costa Rica, los debates sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron claves para ir a una segunda ronda electoral. El tema puso a un político evangélico de extrema derecha, con poca experiencia, al alcance de la presidencia. Si bien las elecciones fueron ganadas por el candidato centrista del Partido de Acción Ciudadana (PAC), la Asamblea Legislativa fue tomada por una ola de políticos cristianos conservadores, quienes nunca han ostentado semejante poder en la política costarricense.

Las preocupaciones sobre las personas migrantes y el uso de los acuerdos sociales están vinculados a ideas sobre las diferencias étnicas y raciales, pero también a la aparición de políticas sexuales como temas clave en las elecciones. Lo que está en juego son las formas en que la racialización se relaciona con el género y sexualidad y cómo eso se desarrolla en los debates sobre la política social. Los Estados están implicados medularmente en las relaciones de género, pero el nacionalismo es clave para el patrón específico de la formación del Estado: las prácticas estatales están íntimamente vinculadas con las ideas sobre las naciones y la identidad nacional. La vigilancia de ciertas personas migrantes y de determinados tipos de relaciones sexuales no trata solo de definir una sexualidad apropiada o una migración apropiada, sino de

establecer cuáles tipos de sexualidad y de migración ponen en peligro al país y cuáles tipos promueven la ciudadanía. Nagel define lo anterior como “economía moral del nacionalismo”, la cual tiene género, sexualidad y es racializada:

Las economías morales nacionales ofrecen lugares específicos para mujeres y hombres en la nación, identifican miembros deseables e indeseables creando relaciones de género, sexuales y étnicas. Los límites y jerarquías dentro de las naciones establecen criterios para juzgar los buenos y los malos resultados de la masculinidad y de la femineidad nacionalistas, y definen amenazas a la integridad moral y sexual nacional (1998, p. 146).

Así pues, en los márgenes de las naciones es donde las reglas sobre ciudadanía y comportamiento nacional se ponen a prueba y se cuestionan, de manera que los extranjeros pueden ser utilizados para definir a los ciudadanos, a la pertenencia, por lo tanto, a la nación misma.

El debate político que surgió desde el anuncio inicial de Guevara y la aceptación y reproducción de este por parte del PLN fue felizmente adoptado por los medios de comunicación, los cuales son claves para explicar no solo la politización de la migración, sino también la persistencia de mitos infundados en torno a la migración. La mayoría de periódicos, incluso *La Nación*, el más importante del país (Robles Rivera y Voorend, 2011), destacaron las posiciones de los candidatos y reprodujeron los mitos infundados en torno a la migración. Por ejemplo, *La Prensa Libre* justificó el llamado de Guevara a un control migratorio más estricto especialmente para los migrantes ilegales, para “evitar que personas que vienen a aportar nada no ingresen, la persona que no aporta y que solo busca vivir de las transferencias sociales tendrá que regresar a su país” (Quirós, 2016). De manera similar, *La Nación*, sin cuestionarlo, cita a Guevara: “la [gran] cantidad de mujeres nicaragüenses que vienen a tierras costarricenses para dar a luz, porque los niños nacidos aquí, según nuestra Constitución, son costarricenses” (Mata, 2016).

Se puede percibir, entonces, la importancia que juega el género en las críticas a la migración, ya que Guevara utiliza la supuesta hiperfecundidad de las nicaragüenses; el periódico más importante de Costa Rica lo cita sin críticas para demostrar los peligros de la migración sin control. Este enfoque, el uso de la salud por parte de las mujeres nicaragüenses, contrasta mucho con la falta de atención a la presencia de migrantes estadounidenses y canadienses, lo cual señala nuevamente la importancia del género y de la identidad nacional en las actitudes hacia las personas migrantes. Si bien se podría argumentar que los hombres mayores pensionados tienen la posibilidad de estresar más al sistema de salud de Costa Rica que las mujeres jóvenes, el enfoque sigue firmemente en la capacidad reproductiva de las nicaragüenses.

El contexto político económico también es clave, ya que hay un marcado contraste entre la dependencia del Estado costarricense de las llegadas de turistas norteamericanos y el pánico sobre la migración nicaragüense. Las desigualdades geopolíticas determinan cuáles grupos de migrantes serán el foco de la indignación xenofóbica. La reproducción acrítica, por parte de los medios, de tales ideas se alinea directamente con la opinión pública, la reproduce y la fortalece, pero no tiene ningún fundamento empírico en absoluto. Voorend (2019), basado en datos secundarios de la misma CCSS y datos cuantitativos y cualitativos primarios, muestra que las personas nicaragüenses están subrepresentadas en los servicios sociales; en términos relativos, tienen tasas más altas de seguro directo con la CCSS que los estadounidenses, alrededor del 65 por ciento contribuye a la seguridad social (la falta de contribución se explica, en gran medida, por la informalidad en la contratación y las barreras institucionales al proceso de regularización). Además, menos del 1 por ciento de la migración se motiva en asuntos relacionados con el embarazo.

El género y la sexualidad emergen en relación con la retórica antinmigrante de derecha de varias maneras. Por ejemplo, si bien históricamente la migración ha sido desde Colombia hacia Venezuela, la reciente crisis en la nación venezolana ha causado a una ola importante de migración venezolana hacia Colombia. De hecho, las autoridades migratorias colombianas afirman que actualmente hay 1.1 millones de venezolanos en el país cafetero; solo durante el año 2018 llegaron más de 800 000 (Bravo Medina, 2018). La xenofobia resultante que enfrentan las personas migrantes venezolanas indica tanto la falta de memoria histórica por parte de muchos colombianos, como las (aparentes) inevitables reacciones de pánico ante las personas migrantes que acceden a los servicios estatales, los cuales ya de por sí son escasos.

Si bien las personas migrantes venezolanas solo pueden acceder a los servicios médicos de emergencia en Colombia (Rozo Ángel, 2018), el rechazo colombiano se ha centrado con frecuencia en los supuestos riesgos que implica la migración para la salud pública, especialmente el riesgo que implican las trabajadoras sexuales. La presencia de mujeres migrantes venezolanas está fuertemente vinculada con el comercio sexual (Wyss, 2017) y algunos medios de comunicación afirman que un tercio de las trabajadoras sexuales en Bogotá son venezolanas (Nación, 2018). Otro artículo publicado en *El Tiempo* advierte sobre una crisis de sida que se espera, la cual se le atribuye a las trabajadoras sexuales de Venezuela: “Una epidemia mortal... cuyo vector de contagio serán los miles de mujeres venezolanas y jóvenes que se encuentran prostituyendo en nuestras caras” (Ochoa, 2018).

De manera similar, en Costa Rica la preocupación por la presencia de trabajadoras sexuales migrantes ha sido una tarea primordial para la policía de migración, particularmente debido a su creciente autoridad bajo la nueva ley de migración. Si bien las redadas en locales de comercio sexual en San José casi nunca resultan en deportaciones (Vargas, 2007), generalmente ocurren bajo la vigilancia de los medios de comunicación y, por lo tanto, sirven para señalar a las mujeres extranjeras como personas no controladas, hipersexuales y que representan un peligro para el Estado y la nación (Rivers-Moore, 2011; Rivers-Moore, 2019). A pesar de que las empresas que se benefician del turismo sexual están llenas de hombres extranjeros, solo las mujeres son obligadas a presentar sus documentos de identificación a la policía de migración y solo las trabajadoras sexuales extranjeras son detenidas (aunque casi siempre son liberadas poco tiempo después). La preocupación por la sexualidad de algunos grupos particulares de mujeres, ya sean nicaragüenses embarazadas, trabajadoras sexuales venezolanas en Colombia o trabajadoras sexuales nicaragüenses en Costa Rica, contribuye de manera importante al enfoque del Estado de fortalecer el control fronterizo y reducir el acceso de las personas migrantes a los servicios sociales.

La politización de la migración: El chovinismo del bienestar como oportunidad

Algunos ejemplos de la forma en que la migración es politizada por los partidos políticos de derecha y los partidos conservadores tradicionales en Costa Rica, pero también casos como el del presidente derechista de Argentina, Mauricio Macri, parecen alinearse bien con gran parte de la literatura sobre politización, principalmente la generada en Europa. La politización se entiende como la expansión del alcance de un conflicto político (Bil-Jaruzelska, 2017). En ese sentido, la migración suele estar politizada, según lo que De Wilde y Lord (2016) llaman una trayectoria doméstica, en la cual esta se representa como un problema doméstico que surge de la opinión pública polarizada (Bil-Jaruzelska, 2017), siguiendo líneas partidistas. Parece existir un consenso creciente en torno a que las estructuras de oportunidades políticas son claves en las explicaciones de la politización (Van der Brug *et al.*, 2015), en cuyo caso la migración se construye típicamente como un problema político de arriba hacia abajo por parte de las autoridades e instituciones políticas formales (Van der Brug *et al.*, 2015). En este caso, los actores políticos como Otto Guevara son determinantes para poner el tema en la agenda política, enmarcar el debate público e influir en las preferencias y prioridades de la gente, porque perciben una oportunidad de ganancia político-electoral (cf. Hooghe y Marks, 2009).

Las oportunidades políticas son claves, porque las quejas por sí mismas no son suficientes para motivar a las personas a tomar una acción colectiva (Bil-Jaruzelska, 2017; Ruedin, 2015). En cambio, para movilizar el apoyo al discurso político antinmigrante, las estructuras de oportunidades políticas incluyen narrativas nacionales, receptividad de los medios de comunicación, políticas partidistas competitivas, referendos y crisis (De Wilde y Zürn, 2012), así como la proporcionalidad del sistema electoral (Van der Brug *et al.*, 2015). Aunque la representación proporcional brinda oportunidades para que los partidos en contra de la migración estén representados en el ámbito nacional, en los sistemas dominados por dos partidos principales es difícil que los partidos en contra de la migración se conviertan en actores serios de los parlamentos nacionales.

Ahora bien, no existe acuerdo en la literatura sobre el papel de los partidos de derecha en la politización de la migración, tampoco en relación con la importancia de los actores nacionales frente a los actores extranjeros. El primer debate se refiere al énfasis (tradicionalmente fuerte) en el papel de los partidos de derecha en los procesos de politización (Bil-Jaruzelska, 2017), porque se cree que comparten el sentimiento antinmigrante (Arzheimer, 2009; Wagner, 2011). Sin embargo, esta idea ha sido cuestionada, bajo el argumento de que no se trata de partidos de derecha radical, sino de partidos de centro-derecha convencionales (Van der Brug, 2015; Meyer y Rosenberger, 2015), incluso, partidos de izquierda convencionales (Meyer y Rosenberger, 2015) y funcionarios de los gobiernos (Voorend, 2019), quienes aparecen con mayor frecuencia apelando al tema de la migración.

El segundo debate es sobre la centralidad de los actores nacionales (Van der Brug *et al.*, 2015) frente a la posibilidad de que actores extranjeros participen en la politización de la migración (De Wilde y Lord, 2016). En este último caso, la migración posiblemente podría enmarcarse no solo como un conflicto doméstico, sino, como indica De Wilde y Lord (2016), también como la trayectoria internacional o de conflicto remoto. Así pues, la politización es impulsada por una competencia entre élites políticas nacionales y extranjeras (De Wilde y Lord, 2016; Bil-Jaruzelska, 2017); además, la política define un claro interés nacional típicamente respaldado por los medios de comunicación (Bil-Jaruzelska, 2017).

En América Latina parecen existir diversas trayectorias. El caso de Costa Rica corresponde claramente con la trayectoria doméstica, pero el caso de Argentina parece combinar la trayectoria del conflicto doméstico e internacional, donde la migración fue claramente politizada por el presidente Mauricio Macri, cuando “provocó una controversia al promover tarifas de servicios de salud y educación para extranjeros, renovando un clima de

xenofobia en el país” (*Diario de Querétaro*, 2018). El contexto de esta controversia fue un supuesto rechazo, por parte de Bolivia, de un “acuerdo de reciprocidad” para garantizar el libre acceso a los servicios de salud para los argentinos que necesitan atención médica en ese país. En este caso, el tema no se enmarcó simplemente como un asunto de importancia doméstica, sino que se polemizó internacionalmente, con una presencia relativamente alta de actores internacionales y una clara posición de identidad nacional y amenazas articuladas a los intereses nacionales (Bil-Jaruzelska, 2017).

A pesar de las variantes, el papel de los medios de comunicación parece ser clave en todos los casos. Hay una concepción bien aceptada en la literatura de que los medios de comunicación son el escenario más importante para los debates públicos sobre temas de relevancia política (Helbling y Tresh, 2011). Es en la esfera pública, y en particular a través de los medios de comunicación, que los reclamos pueden llegar a audiencias más grandes (De Wilde 2013). De manera que estudiar la politización solo a través del comportamiento en los sistemas políticos podría no ser suficiente, ya que no puede existir una politización sin una infraestructura capaz de mediar entre los sistemas políticos y la sociedad. En este sentido, los medios de comunicación de masas desempeñan un papel central en la transferencia de temas de la sociedad a la política, y viceversa, y de la esfera privada a la pública. Asimismo, al momento de comunicar y, lo que es igualmente importante, de formar la opinión pública (De Wilde y Lord, 2016); de poner eso en la agenda política (Thesen, 2014).

Ahora bien, la politización de la migración se basa en ideas, independientemente de si estas son realidad o ficción. Ya sea que la diversidad étnica erosione o no las bases del estado de bienestar, siguiendo a Van Oorschot (2008), hay evidencia de que la solidaridad informal hacia las personas migrantes es baja, en comparación con otros grupos vulnerables (como los ancianos, los enfermos y discapacitados, o bien, los desempleados). Lo anterior se basa en gran medida en las percepciones sobre las características racializadas de la población migrante y su inserción en la sociedad en general y en el mercado laboral en particular, en lugar de los resultados empíricos reales.

En América Latina, si bien la investigación sobre los factores que explican la politización de la migración en los países receptores de la región es todavía incipiente, un análisis inicial de las tendencias observadas en Costa Rica, con similitudes en países como Argentina, parece sugerir que se alinean bien con las lecciones de la literatura europea. Lo que argumentamos aquí es que, a pesar de las variaciones en los regímenes de política social, en la forma en que se politiza la migración y en los actores que la politizan, en todos los casos la estructura de la migración (como un problema político) evoluciona

alrededor de la competencia (percibida) por acceder a las políticas sociales; por parte de grupos específicos de migrantes racializados y, con frecuencia, definidos por género y sexualidad.

Esta competencia percibida se cristaliza en argumentos de imán de bienestar, ya sea como una población migrante desproporcionadamente dependiente de los servicios sociales, o bien, cuando se percibe que los flujos migratorios se explican por la disponibilidad y accesibilidad de los acuerdos de bienestar (Van Oorschot, 2008). Las estructuras de oportunidad política para la politización de la migración surgen cuando tales percepciones toman centralidad en el debate público y político, a menudo en combinación con la desaceleración económica, dificultades financieras-estructurales o el debilitamiento de los sistemas de protección social para brindar una amplia cobertura (en los casos de Costa Rica y Argentina). Por estas razones surgen voces de chovinismo de bienestar, las cuales abogan por la creación de barreras al acceso a los servicios sociales o, como en el caso Argentina, resultan en argumentos para la no reciprocidad internacional en cuanto a la forma en que se tratan las personas migrantes.

El chovinismo de bienestar se refiere al temor que existe entre grupos nacionales (así como en personas migrantes establecidas) de que ciertos nuevos grupos de migrantes roben puestos de trabajo, viviendas y servicios sociales (Faist, 1994). Lo anterior puede traducirse en una política de migración restrictiva, diseñada para evitar que ingresen personas extranjeras y que tengan acceso a programas sociales integrales, o bien, puede resultar en una política de beneficios restrictiva, diseñada para negarle a las personas extranjeras residentes el acceso a los beneficios sociales (Banting, 2000). En ambos casos, las estructuras de oportunidad política para la politización de la migración surgen en torno a la demanda de construcción y movilización de fronteras contra grupos seleccionados de migrantes o minorías étnicas y raciales; un proceso que Faist (1994) llama etnicización de la política. Es decir, el chovinismo de bienestar es clave para explicar los procesos de politización de la migración. En consecuencia, la política social y su disponibilidad son esenciales para entender por qué, tal y como pasa en otras regiones del mundo, la migración es un tema tan politizado en América Latina.

Sin embargo, esto todavía no explica por qué la política social y el chovinismo de bienestar son fundamentales en la politización de la migración. La respuesta a esta pregunta radica en la tensión entre el Estado nación y la globalización. Tanto en el Norte Global, donde la migración se politiza en “defensa” de regímenes de política social bien establecidos y de larga historia, como en el Sur Global, con sus sistemas de protección social a menudo incipientes y más estratificados, el nexo entre política social y migración parece

atender a la misma necesidad: la construcción de la nacionalidad y la fantasía de pertenencia excluyente. Esta construcción se materializa en la relación diaria que mantiene el Estado con sus ciudadanos, a través de los arreglos de bienestar. Como lo expresó Joppke (1999) hace dos décadas, el estado de bienestar era, y sigue siendo, el medio principal por el cual los Estados ganan la lealtad de sus poblaciones (Joppke, 1999).

Siguiendo algunos argumentos de la teoría del poder de los recursos, la migración puede ser percibida como una amenaza económica, política y cultural a este proyecto de la nación, ya que:

El pluralismo cultural tiene el potencial de debilitar las coaliciones de clase asociadas con los estados de bienestar más expansivos al dividir el trabajo organizado en líneas étnicas y lingüísticas y hacer más difícil enfocar la política en una agenda de igualdad económica en vez de en las relaciones y tensiones entre comunidades (Banting, 2000, p. 18).

Además, una mayor conciencia de las diferencias de identidad entre “nosotros” y “ellos” podría desgastar el consenso normativo sobre la redistribución del bienestar. Dados los sistemas de protección social informales, estratificados y menos completos en América Latina (Barrientos, 2004; Martínez Franzoni, 2008), parece que la politización de la migración está más en línea con esta última.

En el contexto europeo, algunos académicos están retomando el concepto de “autoritarismo populista” de Hall (1985) para explorar el surgimiento del apoyo a partidos políticos neoliberales y populistas en lugares donde el estado de bienestar ha sido muy fuerte históricamente. En el caso de Finlandia, por ejemplo, Lehtonen (2016) enfatiza la importancia de analizar los factores económicos, políticos y culturales como articulaciones conjuntas para poder entender por qué tantos ciudadanos finlandeses dicen apoyar a los valores del estado de bienestar; pero votan por partidos populistas de derecha. Al combinar la gran informalidad de los regímenes de bienestar de América Latina con el hecho de que son más liberales que la mayoría de los europeos, la conclusión de Ryner de que la ciudadanía social (entendida como la provisión de bienestar como un derecho social universal) se erosiona, podría ser incluso más aplicable.

En Europa, el cambio de paradigma neoliberal como reacción a la crisis sistémica del capitalismo, a principios de los años ochenta, constituyó un cambio en la lógica del servicio social y la provisión de seguros, con una diferencia

esencial entre la prueba de recursos y el universalismo (Ryner, 2000). Donde antes los servicios sociales se organizaban de acuerdo con los principios del universalismo, ahora son cada vez más privatizados y administrados según criterios de negocios basados en el poder de compra. El bienestar público es cada vez más un producto residual de menor calidad sometido a pruebas de medios, “reservado para ‘los pobres que lo merecen,’ que no pueden pagar la provisión privada o que representan ‘un riesgo inaceptable’ para los proveedores privados” (p. 52). Por definición, la prueba de medios implica una imposición desde arriba. El Estado determina quiénes son los que merecen apoyo y los criterios de elegibilidad para ser clasificados como los merecidos.

De nuevo, según Ryner (2000), lo anterior ha implicado una “seria atenuación de la ciudadanía social” (p. 52); incluso, este autor se pregunta si es significativo hablar de ciudadanos sociales o, más bien, de una ciudadanía económica, basada en servicios privatizados y orientados al mercado. Esto ha desafiado la incorporación de las personas migrantes, quienes en este contexto neoliberal típicamente representan a uno de los grupos más vulnerables, debido a la competencia social interna, la discriminación y la xenofobia.

Conclusiones

En este trabajo, hemos ofrecido una reflexión sobre el proceso de la politización de la migración en América Latina, con especial énfasis en la centralidad (discursiva) de la política social. Si bien nos hemos centrado principalmente en el caso de Costa Rica, parece que el tema forma parte de una tendencia más amplia en todo el mundo, particularmente, en la región latinoamericana. El caso de Argentina lo subraya. Incluso en un país como Uruguay, donde la cantidad de migrantes es relativamente pequeña y se les concede a las personas migrantes un amplio espectro de derechos, han surgido tensiones con respecto a la inclusión inmigrante por la presión que la migración ejerce sobre el sector de la vivienda urbana (Abelenda, 2018). En Chile, un número creciente de migrantes ha generado inquietudes acerca del empleo y la xenofobia se ha dirigido selectivamente a los haitianos y a los colombianos, pero no a los venezolanos (Infobae, 2018). Incluso, Paraguay ha anunciado la necesidad de intensificar el control de la migración indocumentada (Sputnik, 2017). Mientras que más y más personas se mueven por la región, el tema de cómo se recibe a las personas migrantes, a qué asistencia social pueden acceder y cómo responden las comunidades nacionales seguirá siendo de suma importancia.

Hemos argumentado que la política social y el temor a que las personas migrantes se estén aprovechando de los servicios de bienestar han desempeñado un papel clave en la reciente politización de la migración. A pesar de que la investigación demuestra que la retórica antinmigrante se basa más en mitos que en hechos, la politización está afectando las posibilidades de inclusión de la población migrante. Aunque, en teoría, la integración y los derechos humanos son elementos de suma importancia, se han promulgado cambios legales en la gestión de la migración, de manera que se promueve una agenda de exclusión. La retórica antinmigrante recae desproporcionalmente en ciertas comunidades y no en otras; y, como hemos visto en este trabajo, esta retórica a menudo está coloreada por ideas problemáticas sobre la sexualidad racializada y de género.

Referencias bibliográficas

- Abelenda, R. (7 de mayo de 2018). Ratas, robos, abusos en el cobro: así son las pensiones clandestinas donde terminan los inmigrantes. *El Observador*. Recuperado de <https://www.elobservador.com.uy/nota/ratas-robos-abusos-en-el-cobro-asi-son-las-pensiones-clandestinas-donde-terminan-los-inmigrantes-201857500>
- Amaya, S. (4 de diciembre de 2014). Mitos y realidades sobre los inmigrantes que viven en la Argentina. *La Nación*. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mitos-y-realidades-sobre-los-inmigrantes-que-viven-en-la-argentina-nid1745247>
- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflects on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arzheimer, K. (2009). Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe, 1980-2002. *American Journal of Political Science*, 53(2), 259-275.
- Banting, K. (2000). Looking in three directions: Migration and the European welfare state in comparative perspective. En M. Bommers y A. Geddes (Eds.), *Immigration and Welfare. Challenging the borders of the welfare state* (pp. 13-33). London y New York: Routledge.
- Barrientos, A. (2004). Latin America: towards a liberal-informal welfare regime? En I. Gough y G. Wood (Eds.), *Insecurity and welfare regimes in Asia, Africa and Latin America* (pp. 121-188). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bil-Jaruzelska, A. (2017). *Politization of immigration in the United States, the United Kingdom and Poland between 2007 and 2016* (Tesis de maestría). Trondheim, Norwegian University of Science and Technology.
- Bonilla-Carrión, R. (2007). Seguro social y usos de servicios de salud entre personas nicaragüenses en Costa Rica. En C. Sandoval (Ed.), *El mito roto. Inmigración y emigración en Costa Rica* (pp. 145-160). San José, Costa Rica: UCR.
- Bravo Medina, P. (2018). *Más de 1,1 millones de venezolanos están radicados en Colombia*. Recuperado de <https://cnnespanol.cnn.com/video/venezolanos-colombia-migracion-radicados-millon-datos-cifras-pkg-digital-orig/>

- Campos, A. y Tristán, L. (2009). *Nicaragüenses en las noticias: textos, contextos y audiencia*. San José, Costa Rica: UCR.
- Carrillo, R., Martínez Franzoni, J., Naranjo, F. y Sauma, P. (2011). *Informe del equipo de especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación del seguro de salud de la CCSS. Recomendaciones para restablecer la sostenibilidad financiera del seguro de salud*. San José: CCSS.
- De Wilde, P. (2013). Representative claims analysis: theory meets method. *Journal of European Public Policy*, 20(2), 278-294.
- De Wilde, P. y Lord, C. (2016). Assessing actually-existing trajectories of EU politicization. *West European Politics*, 39(1), 145-163.
- De Wilde, P. y Zürn, M. (2012). Can the politicization of European integration be reversed? *Journal of Common Market Studies*, 50(1), 139-153.
- Diario de Querétaro. (28 de febrero de 2018). Desata Macri polémica por cobro de salud y educación a extranjeros. Recuperado de <https://www.diariodequeretaro.com.mx/mundo/desata-macri-polemica-por-cobro-de-salud-y-educacion-a-extranjeros-1032955.html>
- Dobles, I., Vargas, G. y Amador, K. (2013). *Inmigración: Psicología, identidades y políticas públicas. La experiencia nicaragüense y colombiana en Costa Rica*. San José, Costa Rica: UCR.
- Faist, T. (1994). Immigration, integration and the ethnicization of politics. *European Journal of Political Research*, 25, 439-459.
- Fouratt, C. (2014). “Those who come to do harm”: The Framings of Immigration Problems in Costa Rican Immigration Law. *International Migration Review*, 48(1), 144-180.
- Gatica, G. (2017). Aportes de las personas migrantes y refugiadas a la creación de riqueza en Costa Rica. *Revista Rupturas*, 8(1), 71-100.
- González, H. y Horbaty, G. (2005). *Nicaragua y Costa Rica: migrantes enfrentan percepciones y políticas migratorias*. Artículo presentado en la conferencia “Migración Intrafronteriza en América Central, Perspectivas Regionales”. San José. Recuperado de <http://ccp.ucr.ac.cr/noticias/migraif/pdf/horbaty.pdf>

- González, H. y Varela, J. (2003). Encuesta telefónica sobre percepciones de la migración. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional, Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO).
- Hall, S. (1985). Authoritarian Populism: A Reply. *New Left Review*, 151, 115-124.
- Helbling, M. y Tresch, A. (2011). Measuring party positions and issue salience from media coverage: Discussing and cross-validating new indicators. *Electoral Studies*, 30, 174-183.
- Hooghe, L. y Marks, G. (2009) A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus. *British Journal of Political Science*, 39(1), 1-23.
- Infobae. (19 de abril de 2018). Cómo Chile pasó a ser el “imán de inmigrantes” en Latinoamérica. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/04/19/como-chile-paso-a-ser-el-iman-de-inmigrantes-en-latinoamerica/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (1984). IIX *Censo Nacional de Población*, Costa Rica 1984. San José: INEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2000). IX *Censo Nacional de Población*, Costa Rica 2000. San José: INEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2011). X *Censo Nacional de Población*, Costa Rica 2011. San José: INEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). *Encuesta Continua de Empleo*, Costa Rica 2015. San José: INEC.
- Jaramillo, J. (2013). *La crisis en el seguro social de Costa Rica. El problema del régimen en salud*. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Jiménez, A. (2009). *La vida en otra parte. Migraciones y cambios culturales en Costa Rica*. San José, Costa Rica: Arlekin.
- Jiménez, S. (2 de marzo de 2017). Otto Guevara pondrá mano dura a los nicaragüenses. *La Prensa Libre*. Recuperado de “<https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/104637/ottoguevara-pondra-mano-dura-a-nicarag%C3%BCenses>”

- Joppke, C. (1999). *Immigration and the Nation-State: The United States, Germany, and Great Britain*. New York: Oxford University Press.
- Kron, S. (2011). Gestión migratoria en Noroeste Centroamérica: Manifestaciones y contestaciones. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 37, 53-85.
- Lehtonen, M. (2016). 'What's going on?' in Finland: Employing Stuart Hall for a conjunctural analysis. *International Journal of Cultural Studies*, 19(1), 71-84.
- López, M. (2012). *The Incorporation of Nicaraguan Temporary Migrants into Costa Rica's Healthcare System: An Opportunity for Social Equity* (Tesis doctoral). University of Windsor, Windsor.
- Martínez Franzoni, J. (2008). *Domesticar la incertidumbre en América Latina: mercados laborales, política social y familias*. San José, Costa Rica: UCR.
- Martínez Franzoni, J. y Sánchez-Ancochea, D. (2013). *Good jobs and social services: How Costa Rica achieved the elusive double incorporation*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Mata, E. (17 de febrero de 2017). Precandidatos del PLN proponen endurecer entrada de migrantes a Costa Rica. *La Nación*. Recuperado de <https://www.nacion.com/el-pais/politica/precandidatos-del-pln-proponen-endurecer-entrada-de-migrantes-a-costa-rica/BXWQTHKN55EFROGIY72YMMDM2GY/story/>
- Meyer, S. y Rosenberger S. (2015) Just a Shadow? The Role of Radical Right Parties in the Politicization of Immigration, 1995-2009. *Politics and Governance*, 3(2), 1-17.
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2007). *Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010*. San José: MIDEPLAN.
- Mora, S. (2015). *Las luchas por la defensa del derecho a la salud durante el año 2012. Entre concepciones y agendas políticas de las organizaciones laborales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)* (Tesis de maestría). Universidad Nacional, Costa Rica.
- Nación. (13 de julio de 2018). *Mujeres venezolanas son la tercera parte de las trabajadoras sexuales en Bogotá*. Recuperado de <https://www.pulzo.com/nacion/situacion-mujeres-venezolanas-ejercen-prostitucion-bogota-PP520319>

- Naciones Unidas. (2017). *International Migration Wallchart 2017*, División de Población. Naciones Unidas, 2017.
- Nagel, J. 1998. Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations. *Ethnic and Racial Studies*, 21(2), 242-269.
- Novick, S. (2010). Políticas migratorias en la Argentina: experiencias del pasado, reformas actuales y expectativas futuras. En Zurbriggen, C. y Mondol, L. (Eds.), *Estado actual y perspectivas de las políticas migratorias en el MERCOSUR* (pp. 25-54). Montevideo: FLACSO Uruguay.
- Noy, S. y Voorend, K. (2015). Social Rights and Migrant Realities: Migration Policy Reform and Migrants' Access to Health Care in Costa Rica, Argentina, and Chile. *Journal of International Migration and Integration*, 17(2), 605-629.
- O'Dowd, P. (31 de mayo de 2013). Costa Rica retirement not always tropical paradise. Recuperado de <https://www.marketplace.org/2013/05/31/world/costa-rica-retirement-not-always-tropical-paradise>
- Ochoa, P. (14 de octubre de 2018). El elefante en la habitación. *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/paola-ochoa/el-elefante-en-la-habitacion-paola-ochoa-281256>
- Organización Panamericana de la Salud. (2011). *Informe sobre el Estado de Situación Financiera del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Situación Reciente y Proyecciones*. Washington: OPS.
- Quirós, B. (17 de noviembre de 2016). Otto Guevara valora enfocar candidatura en sacar a nicaragüenses ilegales. *La Prensa Libre*. Recuperado de <https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/93126/otto-guevara-valora-enfocar-candidatura-en-sacar-a-nicarag%C3%BCenses-ilegales>
- Rivers-Moore, M. (2011). Los usos de la trata en Centroamérica: Migración, género, sexualidad. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 37, 87-103.
- Rivers-Moore, M. (2019). *Gringo Gulch. Sexo, turismo y movilidad social en Costa Rica*. San José, Costa Rica: UCR.
- Robles Rivera, F. y Voorend, K. (2011). Los dueños de la palabra en Costa Rica en un contexto de reforma neoliberal. *Revista Rupturas*, 1(2), 144-161.

- Rozo Ángel, V. (11 de diciembre de 2018). ¿Cuánto le cuesta a Colombia no atender la salud de los venezolanos? *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/cuanto-le-cuesta-a-colombia-no-atender-la-salud-de-los-venezolanos-304010>
- Ruedin, D. (2015). Indicators of the Political Opportunity Structure. *SOM Working Paper No. 2011-01*. Recuperado de <https://ssrn.com/abstract=1990184>
- Ryner, M. (2000). European Welfare State Transformation and Migration. En M. Bommers y A. Geddes (Eds.), *Immigration and Welfare. Challenging the borders of the welfare state* (pp. 51-70). London and New York: Routledge.
- Sandoval, C. (2004). Contested Discourses on National Identity: Representing Nicaraguan Immigration to Costa Rica. *Bulletin of Latin American Research*, 23, 434-445.
- Sandoval, C. (2007). *El mito roto: inmigración y emigración en Costa Rica*. San José, Costa Rica: UCR.
- Sandoval, C. (2012). Contestar la hostilidad antiinmigrante en Costa Rica. Un proyecto de Ciencias Sociales públicas en curso. En M. Lona (Ed.), *Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales* (pp. 217-240). Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua.
- Solís, P. (2009). El fenómeno de la xenofobia en Costa Rica desde una perspectiva histórica. *Revista de Filosofía*, 47(120-121), 91-98.
- Sputnik. (31 de enero de 2017). Paraguay intensificará control de inmigrantes ilegales. Recuperado de <https://mundo.sputniknews.com/americ-latina/201701311066592735-permeabilidad-fronteras/>
- Thesen, G. (2014). Political Agenda Setting as Mediatized Politics? Media-Politics Interactions from a Party and Issue Competition Perspective. *The International Journal of Press\Politics*, 19(2), 181-201.
- Van der Burg, W., D'Amato, G., Berkhout, J. y Ruedin, D. (Eds.). (2015). *The Politicisation of Migration*. London/New York: Routledge.
- Van Oorschot, W. (2008). Solidarity towards immigrants in European welfare states. *International Journal of Social Welfare*, 17, 3-14.

- Vargas M., O. (19 de abril de 2007). Migración detectó más de 100 matrimonios por conveniencia. *La Nación*. Recuperado de http://www.nacion.com/ln_ee/2007/abril/19/sucesos1067140.html
- Voorend, K. (2013). *¿Universal o Excluyente? Derechos sociales y control migratorio interno en Costa Rica*. Colección *Red de Posgrados en Ciencias Sociales* 32. Buenos Aires: CLACSO.
- Voorend, K. (2019). *¿Un imán de bienestar en el Sur? Migración y política social en Costa Rica*. San José, Costa Rica: UCR.
- Voorend, K. y Robles, F. (2011). *Migrando en la crisis: La fuerza de trabajo inmigrante en la economía costarricense*. San José, Costa Rica: OIM, MTSS, Gobierno de Canadá.
- Wagner, M. (2011). When do parties emphasize extreme positions? How strategic incentives for policy differentiation influence issue importance. *European Journal of Political Research*, 51(1), 64-88.
- Wyss, J. (24 de septiembre de 2017). En Venezuela eran maestras y doctoras. Para comprar comida se convirtieron en prostitutas. *El Nuevo Herald*. Recuperado de <https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article175160626.html>